

Nueva Antropología 42

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

ETNOGRAFIA DE LA EDUCACION

BEATRIZ GALVO, Etnografía de la educación * JUSTA EZPELETA, El trabajo docente y sus condiciones invisibles * ELSIE ROCKWELL, Los usos magisteriales de la lengua escrita * ETEL-VINA SANDOVAL, Condición femenina, valoración social y autovaloración del trabajo docente * RUTH MERCADO, La escuela en la memoria histórica local. Una construcción colectiva * RAFAEL QUIROZ, El tiempo cotidiano en la escuela secundaria * MARIA BERTELY BUSQUETS, adaptaciones docentes en una comunidad mazahua * JESUS TAPIA SANTAMARIA, Entre las garras del águila en medio del Caribe * JORGE ALONSO, Las explosiones de la primavera tapatía de 1992 * RESEÑAS * DOCUMENTOS.

Las explosiones de la primavera tapatía de 1992

Jorge Alonso*

INTRODUCCION

Las explosiones de drenajes en el sector Reforma de la ciudad de Guadalajara el 22 de abril de 1992 conllevaron otro tipo de estallidos en diversos niveles. Explotó y se derrumbó la estructuración política de la entidad. Se tambaleó un mecanismo de control nacional que tanto había redituado en las elecciones federales de 1991, el Pronasol. Se evidenció el deterioro del subsuelo de una política económica que no sólo ha pauperizado crecientemente a las mayorías sino que también pone en riesgo mortal a sectores de la población mexicana. Se debilitó la posición de una paraestatal: PEMEX, que ante las ineficiencias y corrupciones, y en medio del esquema

de negociación respecto al Tratado de Libre Comercio, sufrió presiones hacia su privatización. Posteriormente también se resquebrajó el esquema político que se adoptó para encarar la crisis, debido a los tintes fascistoides que adquirió en el primer mes el gobierno interino.

Como en las novelas policiacas el crimen quedó a la vista. Pero se inició un intrincado juego de ocultamientos de los verdaderos responsables. Aun las primeras evidencias del arma homicida fueron puestas en cuestión. Se persiguió legalmente a responsables intermedios y hasta a no culpables. Se confundieron las pistas y se fueron diluyendo huellas. Hubo todo un mecanismo de distracción para que verdaderos culpables en las altas esferas del poder fueran quedando a resguardo. Se constituyó un enredo de suspenso en el que se sumergió la sociedad.

* Profesor investigador del CIESAS de Occidente en Guadalajara.

EL DETERIORO DE UN "MAL GOBIERNO"

El desgaste político que se vivía en Jalisco se aceleró con las explosiones del 22 de abril.

En 1988 arrastrados por la figura de Clouthier muchos tapatíos se volcaron en las urnas. El PAN consiguió el triunfo de ocho de los diez distritos de la zona metropolitana de Guadalajara. No obstante, tanto el fraude como el hecho de que Clouthier hubiera quedado en tercer sitio a nivel nacional y el auge de un neocardenismo que retaba al poder amainó los ánimos de las clases medias opositoras.

La candidatura de Guillermo Cosío Vidaurri a la gubernatura de Jalisco pocos meses después de la sacudida de los comicios federales del 88 despertó esperanzas entre muchos empresarios. El DHIAC, que había apoyado la campaña de Clouthier prefirió aliarse con el que entonces veía como esperanza de grandes obras para el estado. La campaña de Cosío se centró en el lema por la grandeza de Jalisco, y no pocos lo creyeron. Llegó a la gubernatura en medio de una gran abstención. El nuevo mandatario interpretó esa retirada de las urnas como un signo de que los tapatíos habían depuesto el ánimo opositor. Dijo que no habían querido votar en contra de él, aunque tampoco pudo ufanarse de haber ejercido una atracción electoral.

Se propagandizó que era un jalisciense "de Jalisco" y no del centro, en contraposición de los dos últimos gobernadores que habían sido visualizados como desarraigados. Las primeras

acciones parecían que intentaban la integración de todos los grupos políticos del estado. Pero hubo exclusiones y segregaciones que respondían a una revancha contra quienes habían apoyado a otros aspirantes a la gubernatura. Los relegados y enfrentados se malquistaron fuertemente con Cosío. Otros fueron resquebrajando sus iniciales ilusiones.

Después de un año que parecía que las esperanzas se esfumaban, porque los recursos federales no fluyen, Cosío afianzando sus nexos con la familia del presidente, consiguió el favor del centro para muchos planes estatales.

Pronto centralizó las principales decisiones económicas. No había negocio importante en el estado en donde no estuviera la mano de la familia Cosío. El gobernador abandonó la práctica de los concursos para realización de obras o compras estatales, y encomendó las asignaciones al arbitrio de su familia. Esta y allegados que constituyeron la camarilla cosísta medraron descaradamente con las obras más reductibles. Al cerrarse su círculo, al estrecharse la élite gobernante, los excluidos incubaron resentimientos. Ante el abuso de la familia Cosío se fue fraguando el convencimiento de que hacer negocios prioritariamente y en segundo lugar gobernar no era un *habitus* político permisible por la sociedad. Importantes empresarios fueron enfriando y aun rompiendo sus relaciones con el gobierno de Cosío. La hegemonía política y de los negocios públicos se concentró en la familia de Cosío y sus allegados.

En las elecciones federales de 1991

Cosío se mostró especialmente solícito en aplicar las medidas centrales para conseguir gran cantidad de votos lícitos e ilícitos y así destacar al príncipe jalisciense en la tarea de contribuir a disminuir a la oposición y garantizar una Cámara dócil para los planes presidenciales.

En febrero de 1992 un periodista local publicó en la revista *Proceso* la lista de los principales negocios que se le imputaban a Cosío, sobre todo en los municipios costeros. El artículo de Felipe Cobián se titulaba "Amiguismo, nepotismo, abusos. En la costa de Jalisco". El gobernador sólo acertó a declarar que lo sustentado en ese escrito no era cierto, pero no convenció a nadie, ni aportó pruebas, ni levantó demanda en contra de una supuesta difamación por parte del periodista. En lugar de enfrentar las acusaciones y los problemas presentados por la sociedad consideró que todo era parte de un plan desestabilizador en contra suya. El gobierno del estado trató de impedir que la revista circulara en la entidad, pero esto fue contraproducente. Proliferaron las fotocopias del escrito de Cobián que se repartían primero entre oficinas y casas y posteriormente en las calles como volantes. No pocos de los disgustados por los estilos de ver el gobierno como botón habrían aprovechado el artículo para expresar por *interposita persona* algo que no se habían atrevido a externar. Destapada la acusación, el desprestigio del gobierno se aceleró. Se produjo un hecho de revelación paradójica. Previamente todo eso era conocido en corrillos; al pasar a los medios impresos cobró una dimensión no controlable.

Se propagó como fuego en hierba seca. La sociedad tapatía, acostumbrada a decir las cosas en secreto y a aparentar que en Guadalajara no pasaba nada, terminó por cansarse. La revelación pública de muchos de los negocios del grupo de Cosío que hizo la revista *Proceso* fue un catalizador. El descontento soterrado, al conjuro de la letra de molde de los medios de comunicación, afloró. Lo que podía haberse circunscrito a sectores de las cúpulas empresariales, alcanzó a amplias capas ciudadanas que estaban sufriendo las arbitrariedades del monopolio de la verificación vehicular.

En este contexto de malestar, un policía dio muerte a una joven de clase acomodada, al parecer en un frustrado asalto. Esto colmó con creces el recipiente que ya estaba a punto de derramarse. Muchas madres de familia de "la alta sociedad" se organizaron para realizar una manifestación silenciosa que se denominó de las madres de luto. A ellas se sumaron madres de clases medias e incluso bajas. Querían expresar su descontento por el mal gobierno. Exigían seguridad, que se pusiera alto a la ola de violencia constante e incontrolada. La marcha fue impactante. El gobierno no acertó a reaccionar sino con dos medidas, intentar amedrentar a las que ubicó como principales participantes y perseguir fiscalmente a algunos de sus maridos. Esto avivó aún más el fuego anticorruptivo. Mientras la inseguridad pública se concentraba en zonas periféricas, las clases pudientes la interpretaban como un fenómeno casi connatural al crecimiento poblacional (aunque poco se percibía la relación

que pudiera tener con una política económica empobrecedora que propiciaba crecimiento de delincuencia). Pero el aumento de robos a mano armada a personas y sobre todo a negocios, inquietó sobre todo a los comerciantes. Cuando la violencia se tradujo en muerte de un miembro de clases altas, el sentimiento de que las capas sociales que se creían protegidas de este tipo de situaciones detonó otros descontentos soterrados. Un exgobernador, Flavio Romero de Velasco, en declaraciones a un periódico local, expresó su desacuerdo con Cosío en cuanto a la manera de encarar los crecientes delitos en la entidad. El gobierno apareció como incapaz de ofrecer seguridad.

Cosío todavía no se reponía de la protesta de las madres de luto cuando se encontró frente a otra multitudinaria concentración de maestros estatales que demandaban aumento de sueldos donde las consignas en contra del gobernador tomaron vuelo. Cosío de nuevo no supo sino recurrir a la amenaza. Las arbitrariedades del grupo de Cosío que tenía en el magisterio un bastión considerado como propio, aunadas a la situación de deterioro salarial hizo explotar la impugnación masiva en ese sector.

Al calor de la XIV asamblea nacional del PRI se había generado una corriente disidente en las filas del PRI de Jalisco. El gobierno de Cosío confundiendo al máximo partido y estado no acertó a lograr concertaciones, hostigó a los principales opositores internos e impuso el autoritarismo. Esto se profundizó con las nominaciones de los candidatos locales para las elecciones

de 1992. Los familiares de Cosío vendieron candidaturas impopulares. La concentración de las designaciones para puestos electorales en preferidos por el grupo de Cosío terminó por romper consensos que tradicionalmente existían en el partido del estado. Sobrevinieron desprendimientos, y hubo unas elecciones muy impugnadas. El descontento creció y las elecciones locales constituyeron un golpe para el gobernador. El PRI reconoció la derrota en 18 de los ayuntamientos, pero tuvo problemas en más del doble. El gobernador, en lugar de resolver conflictos, quiso apaciguar con concesiones menores a los partidos opositores, lo cual sólo aplacó a los del PFCRN pero no disminuyó sino exacerbó los ánimos de panistas y perredistas, que exigían que los presidentes municipales oficialmente reconocidos en el alteño Tepatlán y en el costeño Cihuatlán fueran destituidos. Cosío consideró que tenía fuerza suficiente para desconocer pactos entre opositores y la Secretaría de Gobernación, pues anteriormente ya se había negado a ceder posiciones electorales a otros titulares del gabinete presidencial.

Las protestas por los fraudes electorales como por la falta de seguridad pública subieron de tono. Obras públicas realizadas por los allegados a Cosío y a su compadre Dau al que había sacado adelante como alcalde de Guadalajara en 1992 fueron puestas en cuestión. Cosío trató de revertir este desprestigio prometiendo que se abrieran otras concesiones de verificación vehicular además de la que estaba en manos de un monopolio controlado por el recién instalado vicepresidente municipal.

Importantes representantes de la iniciativa privada habían acudido con Córdoba, quien fungía de facto como un vicepresidente de la República, para solicitar el cambio del gobernador. No obstante, Cosío logró en parte amainar el encono de algunos empresarios. El gobernador buscó afianzarse en el núcleo de agraciados con concesiones de obras estatales y en los grupos sindicales corporativizados. Se centró en la interpretación del complot, y apostó a la apatía de las masas para sentirse seguro en proseguir su gestión sólo con algunos remiendos. No obstante, el nepotismo, la corrupción, el predominio de una élite que se fue estrechando en sí misma, los fraudes, la falta de seguridad pública ante los ajustes de cuentas sangrientas entre narcotraficantes y lavadólares y ante una criminalidad incontenible hizo crisis. El acuerdo cupular instituido desde González Gallo había sufrido rupturas. El cosíismo se creía inamovible e impune. Los apoyos en la familia del Presidente de la República se veían como una salvaguarda de cualquier descontento ciudadano. Además, existía la confianza en una paciencia a toda prueba en una entidad en la que una cultura política había llevado a que lo que pasaba se percibiera como sucediendo en el subsuelo sin que llegara a aflorar.

Resumiendo se puede decir que en el primer trimestre de 1992 cuatro elementos se combinaron para que el cuestionamiento al cosíismo se profundizara: a) el descontento por la concentración de los beneficios de la administración; b) el repudio a la falta de seguridad pública; c) el reto al control

cosíista sobre el gremio de educadores; d) un extendido reclamo en contra del fraude electoral. La eficiencia de un gobierno corrupto fue puesta en cuestión por diversas capas de la población.

A todas estas manifestaciones de desasosiego social y político Cosío respondía con la amenaza. No era capaz de entender los rompimientos que su gestión estaba provocando entre la iniciativa privada, entre capas antes nada activas de la sociedad como amas de casa de familias adineradas, entre trabajadores y entre partidos políticos incluido el mismo PRI. Como alguien que cuida su presa, Cosío sólo interpretaba que se trataba de un complot en contra suya, su puesto y los beneficios que estaba disfrutando. Después de su tercer informe había logrado disminuir las críticas de sectores empresariales y de algunos partidos. Quienes veían que los problemas del estado no se resolverían con Cosío en el gobierno se preparaban a una larga lucha.

Los principales partidos políticos opositores cercaron aún más al gobernador. El PAN demandaba auditoría a Cosío; el PRD, juicio político y que fuera cesado. Posteriormente el PAN titubeó; y llegó a externar la opción de un cambio de táctica, y ya no presionar por medio de manifestaciones públicas. A principios de abril, aunque algunos militantes representativos mantenían el dedo en el renglón, la dirección estatal había declarado que no solicitaría juicio contra Cosío. Mientras tanto perredistas de Cihuatlán se disponían a iniciar una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno en protesta por el fraude en ese municipio. En esto esta-

ban cuando sobrevino la explosión del 22 de abril en más de ocho kilómetros de calles de la ciudad de Guadalajara que según datos del INEGI afectó a 98 manzanas con 3 mil 020 viviendas. El Patronato habló de 747 fincas destruidas y 574 parcialmente derrumbadas. La relación de muertos se hizo un tabú. El gobierno reconocía una lista de alrededor de 200, Charitas habló de 600. Hubo estimaciones que daban cifras mayores.

EL ESTALLIDO POLITICO

A las explosiones del drenaje sobrevinieron voladuras de suelos y contracciones políticas en Jalisco. La actuación del gobernador fue lamentable. Cada declaración en la que intentaba explicar su actuación frente a la tragedia lo hundía más. Los afectados lo hicieron verse mal cuando le reclamaron en una sesión que estaba siendo televisada en vivo. Los medios de comunicación, sobre todo la radio, que en los primeros días fue muy viva y combativa contribuyeron a derruir lo poco que quedaba de la figura gubernamental. Dos revistas, *Proceso* y *Epoca* lo acusaron de nuevo de nepotista, negociante, soberbio e inepto. Cosío, para salvarse, le echó la culpa de la omisión en las responsabilidades gubernamentales a su compadre Dau quien a las tres semanas de estar al frente de Guadalajara fue a parar a la cárcel. La presión de la ciudadanía subió en contra del gobernador.

Salinas acudió a la zona del desastre, pidió ver a vecinos y le mandaron

a funcionarios y a un palero con una pegatina improvisada del PRI que el mismo presidente se la quitó. El gobierno estatal se hundió aún más ante la opinión pública. La prensa extranjera destacaba que Salinas actuaba bien, pero que con colaboradores como Cosío se veía entorpecida la acción presidencial. Sobrevino un vacío de poder que fue llenado por la federación, y que propició una expresión ciudadana como antes no se había experimentado.

La certeza popular fue que la explosión se debió a gasolina derramada. Se quiso poner en cuestión esto, advirtiendo que habían sido sustancias provenientes de varias fábricas de la zona que con las obras del tren ligero habían propiciado la explosión. Hubo hasta algunas especulaciones acerca de un atentado. Pero la ciudadanía que había denunciado el hecho, y muchas evidencias llevaban hacia Pemex la responsabilidad. La negligencia ante el peligro denunciado con tiempo por los vecinos de la zona era intolerable. Se estaba ante un drama evitable. Salinas prometió que se determinaría lo que había sucedido y que se castigaría a los culpables. Cosío trató de eludir su responsabilidad alegando que no había estado en la ciudad, aunque se aclaró que antes del siniestro había sido enterado de la gravedad del problema. Colosio en una primera intervención como titular de SEDUE le echó toda la culpa a una aceitera particular. Conforme pasaban las horas la responsabilidad de PEMEX era inocultable. Obras del tren ligero en la línea 2 que realizaban compañías constructoras ligadas a Cosío y a Dau presumiblemente habían tenido

también parte en la tragedia al haber propiciado el taponamiento de los gases en el colector. Se decía que era versión de PEMEX para desviar la atención. Ciertamente no se hubiera dado la explosión sin la presencia de gasolina; pero tanto peca el que mata la vaca... La reconstrucción de los hechos previos a las explosiones dejaban muchos huecos en la interpretación de lo que había sucedido. Cuando la acción penal se encaminó a varios de los encargados del sistema de alcantarillado municipal, un exalcalde planteó que las alcantarillas eran para el desecho de aguas negras y pluviales; que no era su responsabilidad la presencia de gasolina en los drenajes.

Además de Dau cayeron en la cárcel otros funcionarios estatales y burócratas regionales de PEMEX. Las altas esferas de la administración estatal y federal no eran tocadas. Empezó a correrse la versión de que no se debía inculpar a PEMEX porque se propiciaría su privatización. La demanda sobre privatización se propagó en la iniciativa privada. Esta tendencia fue apoyada días después por el economista propagador de las tesis del neoliberalismo, Friedman. Aparecieron encuestas en la zona del desastre que inducían a respuestas tales como si la empresa hubiera estado en manos privadas, sobre todo extranjeras, no habría acaecido el siniestro. Los diseñadores de esas encuestas olvidaban los criminales accidentes propiciados por Union Carbide en la India, y del descontrol del pozo Ixtoc que había sido perforado por una compañía privada en el sexenio de López Portillo. El ánimo antipemex y

antigobierno se caldeó. Esto ocurría mientras se daban las últimas negociaciones del gobierno mexicano con el norteamericano acerca del tratado de Libre Comercio, en el que un punto de desacuerdo versaba sobre el petróleo. PEMEX no daba información. Pero no sólo esa información era escondida; fue sustraída del dominio público la que estaba en el archivo municipal de Guadalajara en cuanto a las obras municipales en la zona del desastre y en los lugares aledaños a la planta de PEMEX en la Nogalera. La dirección nacional del PAN demandó la privatización de PEMEX, y hasta priístas externaron la misma posición. Analistas del ITAM precisaron que una privatización no beneficiaría la situación económica del país. En esta forma, a lo local se sumó lo nacional, y hubo repercusiones internacionales. Desde la explosión empezaron a salir a la prensa muchas fallas en las instalaciones de PEMEX que ponían en peligro la vida de habitantes cercanos a sus plantas, y aun a gasolineras. Lo que antes era llamado fallas o incidentes se percibieron como graves peligros.

Horas después de las explosiones se mandó maquinaria pesada a tratar de cerrar la herida de la tierra. Los afectados se opusieron. Estos alegaron que quienes pudieron ser salvados en esos sitios habían quedado totalmente sepultados por ese removimiento masivo de tierra. Un diputado priísta en el D.F. ante el desconcierto y enojo de los afectados se atrevió a defender esa acción gubernamental como no criminal.

La desgracia ecológica en Guadalajara duró muchas semanas. Hubo la

conciencia de la existencia de un manto de gasolina en el subsuelo debido a la falta de mantenimiento de ductos y por corrupción. Al titular de PEMEX, Rojas, a los responsables de la SEDUE, Chirinos y Colosio se les trató de encubrir y sacar de la escena. A la comisión de diputados federales que acudieron a PEMEX no se les permitió la entrada a la planta de la Nogalera. El periódico *El Occidental* hizo una encuesta, y sus resultados arrojaron que la mayoría pensaba que la responsabilidad era de PEMEX. Se tuvo que evacuar vecinos alrededor de la planta de PEMEX por peligro de nuevas explosiones. Se configuraron nuevos afectados que tuvieron que salir de sus casas por varias semanas. Se cerraron calles, el tren El Tapatío no podía arribar a la estación de Guadalajara. Se propició un largo caos vial en la ciudad que afectaba a pasajeros y negocios. Con la llegada de las lluvias hubo inundaciones y vinieron otros afectados que tuvieron que ser evacuados, y sumarse a los que ya llevaban mucho tiempo de arrimados con parientes o en los albergues y en la calle. El cansancio de esta situación presionaba el ánimo social entre los afectados.

LA CAIDA DEL GOBERNADOR

A dos días del suceso aumentó el clamor en contra del gobernador. Hubo protestas por la manera como se encaraba la cuestión de albergues y ayuda. El gobernador quiso centralizar todo e intentó impedir la ayuda solidaria civil por fuera del gobierno. Esto

fue rechazado. La Coordinadora de ciudadanos y organismos civiles 22 de abril exigió que se respetara el derecho ciudadano para canalizar su solidaridad.

Entre declaraciones contradictorias y en las que iba cavando su tumba política, Cosío era consistente con una sola cosa que había venido repitiendo desde que fue fuertemente impugnado a partir de febrero: "no me iré". El 25 cuando Cosío volvió a la zona de desastre la gente le gritó que a qué iba si no traía pico y pala. Ya no tenía ninguna autoridad entre el pueblo de Jalisco. Pese a su promesas las máquinas habían seguido trabajando y enardeciendo a los afectados.

La Academia Jalisciense de Derechos Humanos sostuvo que se había configurado un delito ecológico previo a las explosiones. El grupo ecologista denominado de los cien pidió la dimisión de Cosío por su "diligente ineptitud". Este grupo exigió que SEDUE reconsiderara su política de encubrimiento de fábricas de alto riesgo. Agrupaciones estudiantiles se sumaron a la demanda de la destitución de Cosío. Este, entre la insistencia de rumores de su renuncia, anunció un plan de reconstrucción en el que los afectados estarían en total minoría y mediados por la organización estatal denominada solidaridad. Los afectados se pronunciaron en contra de tal intento.

A cuatro días del estallido, el PAN de Jalisco evaluó que había vacío de poder, lo cual había impedido una expedita tarea de rescate y obstaculizaba la atención a los afectados. En el gobierno de Cosío se inició una gran pre-

ocupación porque funcionarios federales estaban suplantando al gobernador en las tareas concernientes a la tragedia.

Con el dictamen de la PGR la opinión pública consideró que se exonera a PEMEX y al gobernador. De nuevo vinieron encuestas y el resultado de ellas indicaba que la mayoría consideraba que en el informe de la PGR se estaba protegiendo a alguien. El PAN y el PRD no estuvieron de acuerdo con el dictamen; los afectados tampoco. Se pidió que se reabriera el caso de otra explosión de menores dimensiones y consecuencias en 1983 en la calle Sierra Morena. El PAN además denunció que el organismo de Protección Civil a cuya cabeza estaba el gobernador debió haber evacuado.

La oposición se pronunció por juicio político a Cosío y porque comparecieran en la Cámara Colosio y Rojas. Abogados de Jalisco consideraron aberrante la actuación de la PGR y anotaron también que había irregularidades en el proceso contra los acusados. Surgió la hipótesis de que esto era a propósito para que Dau pudiera salir libre. Otros consideraban que Dau debería estar preso, pero no porque tuviera responsabilidad en este lamentable suceso, sino por acciones previas a su desempeño como Presidente Municipal.

El 28 de abril, Muñoz Ledo, quien había vaticinado la caída de Cosío en un mitin antes de las elecciones de febrero, en su calidad de senador exigió que se examinara la situación del estado y se declarara la suspensión de poderes. Los senadores prístas permitieron que esa solicitud pasara a comisiones sin que ninguno defendiera al

gobernador. El PRD de Jalisco en un desplegado en el que refrendó solidaridad con los afectados la extendió a a todos los damnificados por la política de Cosío. Para el PRD la renuncia de Cosío era inevitable, y arremetía también en contra de las autoridades de PEMEX y SEDUE. Los perredistas se pronunciaron porque los damnificados fueran los propios administradores de la reconstrucción. Este partido solicitó a la ciudadanía que aportara pruebas para el juicio político en contra de Cosío. La desinformación gubernamental provocaba más enojo. La exigencia de la renuncia de Cosío aumentaba conforme pasaban los días. El PAN y el PRD insistían en que PEMEX y Cosío eran responsables.

Colonos y solicitantes de vivienda de la organización intercolonias denunciaron que la antidemocracia dejaba en evidencia la falta de voluntad del gobierno y su partido, señalaban la ineficiencia, la negligencia y la corrupción gubernamental, se oponían a que la reconstrucción quedara en manos de empresas de Dau y demás implicados. Acusaron a Cosío como el máximo responsable. Exigieron que se reconocieran y respetaran las organizaciones independientes y que la indemnización la hiciera PEMEX y el gobierno. Apareció también un frente popular de apoyo a los damnificados (en el que se encontraban entre otras organizaciones CIOAC, Federación de Estudiantes de Guadalajara, Unión General Obrera Campesina y Popular) que se sumó al clamor por la renuncia del gobernador.

A finales de abril alrededor de doscientas personas entre quienes se en-

contraban señoras que habían participado en la marcha del silencio en contra de la inseguridad pública, publicaron un comunicado en el que asentaban que habiendo seguido con atención las declaraciones del gobernador se sentían avergonzadas por sus pronunciamientos que insultaban, que eran producto de una profunda insensibilidad tanto política como social. Exigían un gobernante honesto, inteligente y con verdadera vocación de servicio, por lo que le exigían su renuncia. Responsabilizaban al gobierno de cualquier agresión que sufriera cualquiera de los firmantes. Los ánimos estaban más que caldeados. También académicos sacaron un desplegado en el que sostenían que el estado requería una autoridad que tuviera el apoyo de la población por lo que solicitaban la renuncia de Cosío. El PAN se sumó a la guerra de desplegados en contra del gobierno, exigió justicia para el pueblo de Jalisco y denunció como insuficiente el informe de la PGR (porque encubría a PEMEX, no analizaba la responsabilidad de SEDUE, y no tocaba al organismo responsable de prever y actuar en consecuencia en el caso de siniestros como era el Consejo Estatal de Protección Civil que encabezaba Cosío). El PAN consideraba como causante responsable de la explosión a PEMEX, apuntaba que el gobernador tenía que ser involucrado en la investigación, y enfatizaba que el pueblo de Jalisco se encontraba indignado por la actitud de Cosío. El DHIAC también demandó que PEMEX reparara los daños y que Cosío renunciara.

Las autoridades de la Universidad

de Guadalajara quienes unas semanas antes habían apoyado a Cosío, enfilaron sus baterías sólo en contra de PEMEX, solicitando su salida de la zona habitacional de la ciudad. Posteriormente organizaron un acto denominado Foro Sociedad, gobierno, urbanización y contingencias ambientales al que invitaron para que lo inaugurara a Colosio, con lo que contribuían a que éste se colocara al margen del conflicto.

Finalmente el Cardenal de Guadalajara, quien había acudido al tercer informe de Cosío, quien en sus primeras declaraciones se había visto al mismo nivel que el gobernador, habiendo palpado el sentir general, se sumó a la demanda de la renuncia de Cosío.

Un importante diario norteamericano contribuyó a dar la puntilla. Editorializó que México no podía seguir con gobernantes tan atrasados como Cosío.

El clamor de la ciudadanía y de analistas políticos subía de tono en contra de PEMEX y de Cosío. El PAN planteaba que éste no sólo debía dejar el puesto sino también ser enjuiciado si resultaba culpable. Los diputados panistas enfatizaban que era ya incontestable el rompimiento entre gobernados y gobernantes. Opinaron que Cosío había preparado su propia caída desde el momento en que había asumido el cargo pues no era aceptable una relación entre el pueblo y el gobierno como la que había impuesto.

Cosío se aferraba al puesto. Pidió a la fracción de la diputación federal priísta por Jalisco que no aceptara que los diputados de la oposición se ensañasen en contra de él; solicitó que los di-

putados subieran a la tribuna a defenderlo. Los diputados priístas por Jalisco el día 30 de abril publicaron un manifiesto en el que pedían que no hubiera linchamiento político en contra de Cosío quien se había empeñado en servir “con pasión a Jalisco y a los jaliscienses”.

En la opinión pública se empezaron a manejar nombres de posibles sucesores de Cosío. Gabriel Covarrubias, quien acababa de dejar la Presidencia municipal de Guadalajara a finales de marzo, manifestó estar listo para servir de nuevo. Además de él, y en un primer lugar en las listas se hallaba Carlos Rivera Aceves quien comandaba a los diputados priístas en el congreso local. Además se nombraba al Senador Lamadrid, a Ismael Orozco Loreto y a María Esther Scherman.

Cosío insistía en que no tenía responsabilidad en la tragedia, y se ufana de contar con el apoyo presidencial. Esto lo repitió el mismo día, el 30 de abril, cuando los periódicos reproducían el discurso de Salinas que había puesto en marcha un programa sobre protección de desastres en el que sin nombrarlo pintaba a Cosío. El Presidente apuntó que no eran tiempos para quienes se “prepararon para actuar en un país y en una sociedad que ya pasó, que ya cambió”. No eran tiempos para políticos patrimonialistas ni para aquellos a quienes sólo les interesaban los puestos públicos como una meta a alcanzar.

Los afectados y muchos grupos de ciudadanos se preparaban para la inectiva final el primero de mayo: habían planeado realizar marchas de dolor

y de protesta que se conjuntarían ante el palacio de Gobierno. Los trabajadores de las centrales oficiales habían anunciado que no realizarían el tradicional desfile obrero ese día.

Finalmente, la noche del 30 de abril el Gobernador Cosío pidió licencia por un año, y el Congreso del estado la aprobó. Los diarios locales previendo esto, habían determinado no descansar el primero de mayo. Con la caída de Cosío no hubo sorpresas ni llantos cabeceó un matutino. En el texto donde argumentaba su decisión, Cosío recordaba que su lema había sido “por la grandeza de Jalisco”, no aludió a lo enorme de la tragedia, y se quejó de los ataques sistemáticos que consideraba iban encaminados a desestabilizar su administración. Hasta en la renuncia su terquedad mostró que no era capaz de percibir el porqué del divorcio entre su gobierno y el pueblo.

Para evitar nuevas elecciones el gobierno central optó por la modalidad de la licencia. El gobernador interino provenía de las filas del equipo de Cosío. Este se iba pero quería dejar sus espaldas cubiertas. Desde el centro, sin tomar en cuenta a la ciudadanía, de manera antidemocrática se colocó a Rivera Aceves para que sustituyera a Cosío. El PRD votó en contra de esa decisión, mientras el PAN se dividió: cuatro diputados estuvieron de acuerdo, y los otros tres se opusieron. Rivera asumió el cargo en medio de grandes impugnaciones populares. Las marchas de dolor y de protesta fueron a concluir al Congreso local en donde Rivera era designado gobernador interino. Las demandas airadas deslucieron

el acto. Muchos de los manifestantes gritaban que Cosío y Rivera eran lo mismo. Exigían nuevas elecciones. Posteriormente el nuevo gobernador intentó minimizar el repudio manteniéndose en la misma lógica de Cosío: unos cuantos intentaban desestabilizar. Primero admitió que se trataban de unas mil personas. Cuando un periodista le recordó que eran más, no aceptó una cifra mayor de dos mil, e interpretó que los que no se habían manifestado en contra y se habían quedado en sus casas estaban en su favor.

El interino trafa la fama de comportamiento antidemocrático en contra de los grupos internos de oposición del PRI y de ser responsable de varios de los casos impugnados electoralmente. Había influido en su designación su amistad con el que sería en unos días más el Presidente del CEN del PRI, el exgobernador de Zacatecas, Genaro Borrego. En la lucha por la nominación de la candidatura priísta a la Presidencia implicaba una posición en favor de Colosio. Las formas que se adoptaron para reestructurar el gobierno del estado y de la capital tapatza emanaron de la misma presidencia, con mediación de presiones y arreglos intergrupales oficiales. A la ciudadanía se le puso al margen. En algunos casos se adoptaron fórmulas que salvaguardaran al poder para que no se viera expuesto al juicio de nuevas elecciones, las cuales el partido del estado preveía, con fundamentos, totalmente adversas. El gobierno requería tiempo, para ocultar culpabilidades en altas esferas y

para diseñar nuevos escenarios políticos más favorables a la continuación de una dominación escudriñada. Necesitaba culpables, y rápidamente señaló a algunos en niveles intermedios. El Presidente de la República se colocó por encima de la tragedia y se presentó como el garante de la resolución del problema. Las implicaciones que pudiera tener él y su equipo gobernante se pretendieron soterrar. Las responsabilidades presidenciales quedaron totalmente ocultas. Se quiso apelar a la cultura política de que todo queda resuelto con la remoción de gobernantes repudiados, pero sin aplicarles la ley. Algunos núcleos de la sociedad ya no aceptaron esta transacción.

No obstante, afloró toda la podredumbre de un gobierno desvinculado del pueblo cuando aconteció el estallido del 22 de abril. Ni para prevenirlo, ni para afrontarlo tuvo capacidad de gobierno Cosío. Siguió aferrado a un puesto sin más sustento que la voluntad presidencial. Para entonces ya era patente un vacío de poder que profundizó la actuación del gobierno federal. La presión pública en la que intervinieron la mayor parte de los sectores tapatzos (empresariado, jerarquía eclesiástica, partidos políticos de oposición, opinión pública, y sobre todo afectados) ayudada por la presión internacional contribuyó a la caída del gobernador. Pero todavía hasta un mes después, proseguía su impunidad. El desprestigio del gobernador afectó al mismo PRI, que ante la tragedia se vio fuertemente repudiado por los afectados.

REACOMODO POLITICO DE ELITES

En el nuevo gobierno había la necesidad de dar la imagen de que no se tenía nada que ver con Cosío. Rivera procuró conciliar grupos políticos internos. Hubo muchos cambios en su equipo. Hasta uno de los que habían sonado como posible sucesor de Dau, fue invitado a presidir la Secretaría de Educación y Cultura. Esta dependencia vio su presupuesto incrementarse debido a las medidas de federalización de la educación adoptadas días después, con lo que Eugenio Ruíz Orozco quedó al frente de un cargo de importancia en el estado. Rivera incluyó a Covarrubias en el patronato de reconstrucción. Pero las obras públicas siguieron en manos de los ligados con Cosío y Dau. El nuevo gobernador dio a entender que el PRI no se suicidaría al quitar esas obras, pues eran pago por las aportaciones que habían hecho a la campaña del PRI en los comicios locales. Siguiendo el esquema del anterior gobernante, pronto, la mayoría de sus compadres y quienes habían integrado con él en la facultad de derecho un equipo de básquetbol asumieron puestos de importancia. Rivera le otorgó al PAN una posición en su equipo. Nombró a un panista en el departamento jurídico. Para sanar las heridas con los empresarios resentidos con Cosío a Sandra López Rocha se le puso al frente del Consejo Consultivo Estatal de Protección Ciudadana. Los empresarios juzgaron que era tiempo de que los gobernantes se dedicaran a eso, al gobierno, y no a hacer negocios, cosa que les tocaba a ellos.

Sin Dau a la cabeza, el ayuntamiento de Guadalajara perdió toda posibilidad de actuar. Se le señalaba como paralizado. Tuvo que ser cambiado. La costosa campaña de Dau llevó al gobierno de la capital del estado a un equipo que duró sólo 36 días. Los empresarios aclararon que debía respetarse la vicepresidencia en el ayuntamiento. Quien había ocupado ese sitio en el equipo de Dau y que estaba al frente de la impugnada empresa de verificación vehicular, no podía quedarse por más tiempo. Muchos empresarios esperaban que el sucesor en la vicepresidencia fuera el hermano de Sandra López Rocha, de la empresa zapatera Canadá. Al frente del ayuntamiento se dio como un hecho la designación de Eugenio Ruíz Orozco del equipo de Alvarez del Castillo. Cuando ya los periódicos daban por seguro que quedaría al frente del ayuntamiento tapatío surgió otro. Entre la sorpresa de todos el agraciado con la presidencia del Consejo municipal de Guadalajara fue Mora López. Este venía del equipo del exgobernador Orozco Romero. Hacía apenas dos días se había encargado del Departamento de tránsito. Sin mediar el tiempo de renuncia para asumir el cargo que se le otorgaba, había entrado en funciones reales como Presidente Municipal desde horas antes de su nombramiento oficial. Esto mostró que lo que sucedía en el Congreso era un trámite más, y que la decisión real estaba en otro sitio. El nuevo ayuntamiento se conformó de la manera corporativa más vieja. Las regidurías de los priístas renunciantes fueron asignadas a la CTM, a la CROC, a la CROM, al

sindicato del seguro social, al SNTE, y hasta a un secretario de García Paniagua. La vicepresidencia se le dio a quien se encontraba dirigiendo la Cruz Roja. Primero se pensó que a Mora lo había impuesto el nuevo gobernador. Después se corrió la interpretación de que era un premio de consolación para el Senador Lamadrid quien había negociado esa posición de uno de sus pocos allegados con Córdoba Montoya. De inmediato de 37 comisiones que surgieron en el Consejo municipal, los once integrantes del PRI encabezaron 34, mientras los cinco del PAN sólo accedieron a 3. Esto provocó una protesta del blanquiazul.

LA INTERPRETACION DE LOS PARTIDOS

El PRI se desdibujó junto con el gobierno. Los viejos modos siguieron imperando en la clase política del estado. Mientras estaba Cosío aparecían muchos desplegados de apoyo. Una vez que se fue, como si nada hubiera acontecido, los priístas siguieron con los desplegados, ahora apoyando a Rivera. Ni dignidad, ni autocrática. Puro seguidismo servil.

El PFCRN como en todos los acontecimientos después del arreglo electoral con Cosío que les dio posiciones en el Consejo municipal de Amacueca, apoyaron al gobierno.

La oposición panista y perredista denunció que la designación tanto del nuevo gobernador como del Consejo municipal de Guadalajara respondían a consignas del centro, a decisiones verticales.

Los diputados de oposición que se manifestaron en contra de la designación de Rivera Aceves argumentaron que no era conveniente porque venía de la dirigencia del partido oficial, porque se había tratado de una decisión antidemocrática, porque se estaba haciendo una política que ligaba y subordinaba el poder legislativo al ejecutivo. La dirigencia nacional del PAN, comentando la remoción del gobernador por parte de la presidencia de la República, señaló que en México no se respetaban las instituciones que consagraba la constitución. El PAN de Jalisco analizó que pese a que la caída de Cosío había sido una orden presidencial, también era un triunfo de los ciudadanos. El PRD insistió en que se debía fincar responsabilidades penales a Cosío.

Gobernación, además de dar orientación a los principales medios de comunicación en el sentido de que no conectaran a Rivera con Cosío, aclaró de inmediato que no se investigaría a Cosío. Cárdenas declaró que la caída de Cosío era un síntoma de la descomposición política de la administración de Salinas. Muñoz Ledo, además de exigir juicio político a Chirinos, Colosio, Rojas y Camacho (la opinión pública era que había maniobras para proteger a PEMEX y a SEDUE), no abandonó el tema de que a Cosío se le debía meter en prisión. Grupos de damnificados siguieron planteando la necesidad de enjuiciar a Cosío.

Los regidores del PAN en Zapopan manifestaron públicamente que era urgente restaurar la confianza y el clima de armonía ya perdidos por lo del 22 de abril. Para el nombramiento del nuevo

governador se debía haber tomado en cuenta la opinión de todos los sectores de la sociedad tapatía, cosa que no se había hecho. Además acusaron a Rivera de carecer de los requisitos mínimos de probidad, honorabilidad e imparcialidad para un buen gobierno, todo lo cual era indispensable en la situación de crisis. Los regidores panistas de Zapopan destacaron que Rivera era amigo personal y parte del equipo de trabajo de Cosío. Recordaron que cuando había llegado a la presidencia municipal de Zapopan en 1988 lo había hecho en medio de un operativo fraudulento, apuntaron que también al frente del PRI Rivera fue artífice del operativo de fraude. Insistieron en que a unos cuantos días de su gobierno interino no se corregían las formas de gobernar, que seguían imperando los sistemas antidemocráticos y que la sociedad civil estaba al margen de la toma de decisiones. Exigieron nuevos sistemas de gobierno.

El PAN consideró que la renuncia de los regidores priístas del ayuntamiento de Guadalajara había constituido una falta de respeto a la ciudadanía y a su voto. Todo el acontecimiento revelaba patentemente que el voto no era respetado ni considerado. La decisión de la ciudadanía no era tomada en cuenta para nada. Sólo se imponía el poder presidencial. Recalcó que los ediles panistas no habían renunciado porque el pueblo había votado por ellos. El PRD calificó la integración del nuevo Consejo como un nuevo "centralazo". Este partido enfatizó que se debían haber convocado elecciones extraordinarias.

El hecho de que el gobernador

mandara llamar a un diputado local priísta para encabezar la dependencia de turismo volvió a colocar en el tapete la falta de respeto del ejecutivo al legislativo. El primero tomaba al segundo como parte de sus subordinados.

El PRD jalisciense denunció que la licencia de Cosío había pretendido dar una salida a la crisis política que se vivía en el estado, y que buscaba exonerar al anterior mandatario. No obstante señaló ese partido que no había que perder de vista la inepta y corrupta camarilla que lo había acompañado. La crisis la ubicaba el PRD en la negación a los mexicanos del derecho a elegir libremente a los integrantes de los poderes de la federación, de las entidades, de los municipios, y por lo tanto de controlar su gestión. Los perredistas enfatizaron que el cosíismo y sus consecuencias habían sido incubados en un sistema antidemocrático. Para la crisis de gobernabilidad la única salida viable hubiera sido la destitución de Cosío y convocar a elecciones. Pero como si esto se diera el PRI hubiera perdido las elecciones, se había optado por una decisión vertical una vez más. En opinión del PRD, Rivera Aceves asumía el cargo con el estigma de haber formado parte del grupo de Cosío. Los perredistas no dejaban de lado la demanda de realizar una auditoría al gobierno de Cosío. Anotaban que no se había esclarecido si las obras del tren ligero en la línea dos habían influido o no en la tragedia. El PRD exigía también que se retirara de los cargos públicos a funcionarios comprometidos con los aspectos más nefastos de la administración de Cosío y en particular a su numerosa

parentela. El PRD planteó que se requería la concertación y el diálogo con la sociedad, prontitud y eficacia en la respuesta gubernamental a las demandas de los afectados el 22 de abril, reconstrucción con la participación plural de la ciudadanía y en especial con los mismos afectados. El PRD anunció que replantearía el caso de Cihuatlán.

LA PRIMERA ACTUACION DEL NUEVO GOBERNADOR

El 8 de mayo Rivera decía que no había solicitado auditoría contra Cosío. Respecto a la verificación vehicular anotó que había mandado hacer un estudio. Posteriormente anunció que se haría una consulta popular tanto en torno a ese asunto como acerca de la construcción de la presa El Purgatorio que tanta controversia había levantado meses atrás. En un principio los empresarios y el PAN se habían opuesto a su construcción. Después estos últimos habían aceptado el razonamiento de Cosío. Posteriormente, con el anuncio de que el BID no daría el financiamiento por considerarla una obra incosteable, se ponía de nuevo en tela de juicio la viabilidad de su construcción.

Rivera de inmediato fue a la zona afectada y aceptó de palabra las propuestas de los afectados. Sin embargo cuando se trataba de firmar lo acordado, los compromisos se estrechaban tanto en número de casas a entregar de inmediato como en lo concerniente a la reconstrucción en la zona. Esta demanda se la plantearon una y otra vez los afectados, y el gobernador hacía como

si no fuera formulada. No obstante, inicialmente Rivera adoptó una postura de diálogo. Los damnificados criticaban que al frente de Pronasol estatal, implicado en todo lo referente a las indemnizaciones, siguiera Contreras, quien había sido puesto por Cosío. Metió a los afectados en una dinámica de prisa y no se respetaron sus tiempos. Rivera parecía que quería tratar de cambiar de estilo de gobierno con respecto a los modos de Cosío. Pronto tuvo entrevistas con todos los partidos políticos. Con el PRD (aunque el día de la visita del Presidente a la zona afectada, el 15 de mayo, por la desorganización se tuvo que acortar su estancia, cosa que el gobernador achacó a infiltraciones de perredistas trasdos de Michoacán) se disculpó de esa acusación, y se puso de nueva cuenta en la mesa de negociaciones el caso del municipio de Cihuatlán. Días después, sin fundamentos, volvería a acusar al PRD de estar agitando a los damnificados. Esa acusación la extendió también en contra del PAN. Los del FAD también acudieron con Rivera y pudieron establecer contacto. Aunque en todo este diálogo con la oposición Rivera recalcó que no se dejaría presionar. Otra de las contradicciones en que incurrió el nuevo gobernante fue que confesó que las acciones en favor de los afectados beneficiarían al PRI, pero acusó al PRD y al PAN de querer sacar provecho político de la situación. La oposición se remitió a los hechos. Estos eran los que demandaban los afectados, que prosiguieron con sus protestas porque más allá de las iniciales buenas formas, veían que se les escatimaban sus princi-

pales demandas en cuanto a la restitución de demandas y reconstrucción del barrio. Las indemnizaciones que empezó a hacer el gobierno no alcanzaban para reponer lo perdido. Además los damnificados que se opusieron a ser corporativizados se pronunciaron también en contra de la táctica gubernamental que inducía división entre ellos. Se empezó a dar una confrontación por el control de tiempos y espacios. Las instancias gubernamentales, en las que se encontraba la culpabilidad de la tragedia, imponían sus ritmos, y controlaban un espacio en disputa por parte de los afectados, que entre ruinas era lo único que tenían para negociar la reconstrucción.

LOS INTENTOS DE RECOMPONER EL CONTROL OFICIAL

A los afectados el gobierno los quiso manipular de inmediato. En medio de la pugna de Pronasol estatal y federal, los afectados se vieron jaloneados y violentados en su incipiente organización independiente. Con la táctica de todo urgía se les quiso coptar y cercenar representación y demandas. Se les llevó con el Presidente y él fue a la zona del desastre. Pero el apresuramiento y las contradicciones en la burocracia de los "pronasoles" se le revirtió a ésta porque el día que estaba previsto para que el Presidente hiciera la entrega simbólica de algunas casas, la indignación por la manipulación afloró y el acto no pudo llevarse a cabo.

Independientemente del señala-

miento concreto de un culpable de la tragedia, todo apuntaba a una conjunción de responsabilidades gubernamentales que implicaban desde PEMEX, pasando por SEDUE y el gobierno estatal hasta llegar al municipal. Los afectados tenían claridad en cuanto a que no se había tratado de una desgracia natural sino de una tragedia evitable en la que había responsables de muertes, lisiados, heridos, destrucción de casas y bienes, dolor, desamparo, etcétera. La responsabilidad podía llegar hasta a la misma presidencia de la República. Cuando el actual presidente estuvo al frente de la SPP delineó la política económica que repercutió en el hecho de que PEMEX aportara recursos al gobierno pero no se hicieran las reparaciones convenientes de sus instalaciones. Esto fue denunciado por los líderes del sindicato a mediados de los años ochenta. Eran líderes corruptos, pero lo que decían en cuanto a los problemas del mantenimiento de PEMEX tenía fundamento. De entonces hasta el 22 de abril de 1992 se dieron muchos incidentes y accidentes. Salinas había mandado encarcelar a la dirigencia del sindicato petrolero y recibió aplauso interno y externo pues se decía que había erradicado la corrupción. Si ésta había proseguido, según muchas evidencias, el Presidente no podía eludir responsabilidad. Al frente de la empresa petrolera y de la Secretaría que debía haber cuidado todos los aspectos ecológicos estaban personajes del equipo cercano a la presidencia.

La política económica había empobrecido a las mayorías del país en forma alarmante. La concentración del

ingreso se fue haciendo cada vez más indignante. Para evitar que los estallidos sociales afloraran como en muchos países de América Latina y aún como en ciudades norteamericanas, el gobierno de Salinas ideó el Programa Nacional de Solidaridad, el cual introdujo obras sociales como beneficio y no como derecho de las mayorías. Uno de los graves problemas de Pronasol ante hechos como la catástrofe de Guadalajara del 22 de abril de 1992 ha sido que en este caso no debía hacer intervenir en los costos de las obras a los afectados. Se trataba de gente que había sufrido un daño que tenía que ser reparado. No obstante, dado todo el descrédito gubernamental que implicó el desastre, y ante la nascente organización independiente, se quiso recomponer el control social y político vía Pronasol. Pero muchos afectados levantaron otra demanda: "fuera Pronasol".

Así el agresor se intentó transmutar. Se transfiguró introduciéndose en medio del agredido y por acto mágico eludió su culpabilidad y apareció como el gran benefactor. Otro de los cometidos de la burocracia de Pronasol en la zona afectada por las explosiones ha sido impedir la democracia de los afectados. Se ha trampeado la designación de representantes tanto de cuadra como en el Patronato para la reconstrucción. Se han ido recortando y aun eliminando puntos básicos de la agenda de los afectados. El gobierno, a través de Pronasol ha querido vestirse de la representación de los afectados. Se ha producido la necesidad con la que después se pretende utilizar para rehacer el control. El gobierno se resiste a negociar

plenamente con un "otro" constituido independiente. Intenta impedir su conformación como una alteridad orgánica. No quisiera tanto negociar cuanto someter. Tiene la idea de que los que no se dejan meter en los esquemas previstos de la burocracia de Pronasol son revoltosos a los que hay que derrotar. La indignación de los afectados ante tortuosas burocracias de indemnización son consideradas no como justos reclamos sino como agitación provocada desde fuera. Hay una contradicción entre autonomía y control. Se introduce una mecánica del desgaste por medio de burocracias pagadas de tiempo completo en contra de unos afectados, que además de verse ante la necesidad de subsistencia tienen que generar formas de organización y de defensa, ante las manipulaciones gubernamentales que corporativizan las demandas de los afectados.

Con la recomposición del gobierno las cúpulas volvieron a sus antiguos tratos. Se afrontó la crisis de gobernabilidad al margen de la democracia. El PAN y el PRD señalaron esa gran falla, pero no pudieron incidir en los acontecimientos. Al mes del desastre, las cúpulas empresariales y el nuevo gobierno habían rehecho sus antiguas alianzas. La jerarquía eclesiástica repitió sus antiguos discursos sin cercanía real con los afectados, y hasta entrando en conflicto con algunos grupos de ellos a los que acusó de no estar contentos con nada y con nadie. El gobierno y los empresarios iniciaron una campaña que recalaba que ya no pasaba nada, que el estado se encontraba de pie, que había que dejar que las tristes evocacio-

nes no salieran del rincón de la memoria donde les correspondía estar. Si el PRD, por sus divisiones internas no sanadas todavía, no logró mostrar una actividad consecuente, el PAN, que tantos votos ha cosechado en la capital tapatía, no acertó a encontrar un sitio preponderante en esta coyuntura. Incapacidades propias de los partidos y hostigamiento por parte del nuevo gobierno contribuyeron en cierto perfil bajo de los partidos opositores. Sólo tuvieron presencia a través de la actuación de sus diputados, pero no entre la ciudadanía, por más que el gobierno los tildó de agitadores. El PRI, en total descrédito, apostó al largo plazo amparado por la organización del Pronasol. No obstante, dadas las contradicciones de la burocracia instituida para las primeras indemnizaciones a las afrentas de la destrucción se han ido sumando las de una insuficiente reparación. Las sospechas ciudadanas acerca de un manejo no claro de los recursos donados vía gubernamental a los afectados fueron constantes. Si en torno a las causas y responsabilidades del desastre la información no fluía, la concerniente a los donativos seguía el mismo comportamiento.

LA REPRESION

Una vez que Rivera Aceves hubo recompuesto la alianza entre las cúpulas, y que pudo ejercer persuasión y aun presión sobre los medios de comunicación, se optó por medidas de mano dura aparentando conservar la apertura inicial. En un principio quiso ganar-

se a los damnificados. Pero el gobierno interino confundió diálogo con sometimiento a sus planes. Cuando un activo grupo de damnificados, que habían perdido todo menos su dignidad, y que tenían el coraje de exigir sus derechos, como no aceptó ser incorporado en el nuevo marco corporativizante del patronato de reconstrucción, fue asediado. Los afectados independientes demandaban insistentemente vivienda provisional inmediata, firma de un compromiso previo a la demolición por medio del cual las autoridades se comprometieran a que los montos otorgados alcanzaran para la reconstrucción, y recuperación del barrio. El gobernador fue a dormir en la calle en tienda de campaña con algunos de ellos. También acudió a un programa televisivo en el que de muchas maneras le plantearon esto y le demostraron que nadie los manejaba sino que pensaban por cuenta propia. El gobierno no respondió a esas demandas. Una vez que el gobernador, por promesas, compra e incluso coacción, logró tener de su lado a un gran número de representantes de cuadra, quiso aislar a los independientes. Estos, inconformes con el rumbo que tomaba la reconstrucción inmersa en burocracia y falta de compromisos claros, decidieron a finales de mayo realizar marchas y una manifestación para insistir en sus demandas. El gobierno intentó sabotear esos actos. Con desplegados pagados con dinero de la reconstrucción el gobierno ostentó que había logrado el control de una gran parte de los representantes de cuadra para descalificar tal acción. No obstante, los independientes realizaron lo que

tenían planeado y lograron la asistencia de un millar de personas. Con esto se mostraba la desvinculación de muchos de los damnificados respecto a los representantes de cuadra que habían firmado el desplegado en favor de los planes del gobierno. Después de la marcha se instalaron frente al palacio de Gobierno y plantaron ahí tiendas de campaña. En la madrugada del primero de junio un grupo militarizado los atacó. Hubo muchos golpeados (en particular el que había lanzado canciones de protesta la noche que el gobernador había ido a dormir a una de las calles de los afectados) y destrucción de sus tiendas. El gobierno, intentó responsabilizar de inmediato a los mismos afectados y a partidos de oposición. Las evidencias llevaban a cuerpos policíacos. Con esto se mostró que la apertura gubernamental era escasa y que, a falta de haber suscitado consenso en esta agrupación, se había optado por la fuerza como advertencia de lo que podría seguir si no había sometimiento a la línea gubernamental. Sin embargo, el que los afectados, encima del agravio de haber perdido sus casas fueran golpeados provocó el rechazo de la ciudadanía. El hecho de que se les acusara de minoritarios y de que había partidos políticos actuando entre ellos no justificaba la represión. Cualquier grupo tenía derecho de expresar sus puntos de vista. Los partidos políticos tenían también el derecho a la acción en torno a los problemas ciudadanos. No obstante, este nuevo movimiento en su radicalidad cívica, era muy independiente de las líneas partidarias y no era tan minoritario. Las acciones del gobierno

interino desataron las críticas de la población y de los partidos. Días después, el patronato para la reconstrucción, una comisión de diputados y los independientes acordaron abrir un espacio de diálogo y propuestas. El grupo de damnificados propuso una lista de diez puntos, entre los que destacaban el de vivienda provisional unifamiliar de inmediato, que el Patronato entregara una carta compromiso que posibilitara la reconstrucción de la zona antes de la demolición, y pago de las indemnizaciones sin burocratismos. El patronato se comprometió a entregar un proyecto de construcción de vivienda provisional; para los arrendatarios se prometió un menú que contemplaba ya la consecución de casas en renta o el estudio en torno a crédito para pie de casa. También surgió el acuerdo de que el patronato tendría una reunión semanal con el grupo independiente, y que una comisión formada por diputados investigaría los hechos represivos. Pero ni ahí se sacó en claro lo concerniente al compromiso firmado de la reconstrucción en el mismo lugar.

Los hechos habían configurado una nueva situación de ingobernabilidad. Las interpretaciones del gobierno de que los agresores habían salido de los mismos damnificados y no de la policía, nadie lo creyó. La hipótesis de que alguien dentro del gobierno hubiera sido, también ponía en evidencia la falta de gobierno. El que se haya acudido a la represión acarreó condenas fuertes contra Rivera, quien quedaba al menos como un vengativo en contra de los que no había podido someter. Los independientes ni por las buenas, ni por

las malas se doblegaron. Persistieron en sus demandas asistidos por su derecho.

Con este hecho el nuevo gobierno perdió confiabilidad entre la ciudadanía. La irresponsabilidad verbal del gobernador ante los hechos tensó además las relaciones con el PRD y el PAN. Un dirigente panista advirtió que por declaraciones como las que el gobernador hacía en torno al caso del desalojo de afectados de la Plaza principal, había caído Cosío. No era posible, sin pruebas, achacar a los partidos planes desestabilizadores. No había capacidad para percibir reclamos auténticos entre los damnificados. Si las cosas no salían como el gobierno las planeaba había infiltrados, había agitadores, se fraguaba desestabilización... Lo que desestabilizaba al gobierno eran sus propias acciones. Los increíbles y desafortunados intentos de explicaciones, ensayados por el gobierno (como el querer atribuir a los mismos afectados la golpiza) reforzaba la imagen de incapacidad. El testimonio de los afectados como el de una representante de la Academia Jalisciense de Derechos Humanos que estaba presente, quitaban piso al gobernador que había intentado contraponer su palabra contra la de los damnificados reprimidos para inculparlos y salvar la imagen de su gobierno. Comisiones de derechos humanos, grupos de religiosas, profesionistas, personalidades, y ciudadanos en general condenaron la represión y las explicaciones de Rivera. El nuevo gobierno quedaba en evidencia tanto por sus actos como por sus declaraciones.

Ante los signos de falta de capacidad para gobernar de alguien con los

mismos vicios que Cosío agravados con una inclinación represora, entre la ciudadanía se empezó a perfilar el reclamo de autoridades confiables. Esto implicaba en primer lugar la renuncia de Cosío (y no una simple licencia), la renuncia de Rivera y elecciones para que la ciudadanía decidiera libremente por quien debería gobernar la entidad por los dos años y nueve meses que restaban al sexenio en turno. Si esa fundada demanda no prosperaba, al menos ataba la mano represora y propiciaba una mayor vigilancia ciudadana sobre el gobierno.

UN MOVIMIENTO CIUDADANO NACIENTE Y LA BUSQUEDA DE DEMOCRACIA

Los últimos acontecimientos de la primavera del 92 en Guadalajara han ido marcando a sectores de la sociedad. Las explosiones despertaron conciencia ciudadana tanto entre los afectados como en muchos otros núcleos. La zona del desastre había sido apática políticamente, sujeta a los votos corporativos de la CROC. Las explosiones indujeron actividad política no partidaria sino cívica. Se iniciaron tentateos de organización ciudadana que reclamó respeto a su constitución. En su novatez ha confundido las tácticas con la estrategia, pero ha ido aprendiendo.

Se dio efectivamente una recomposición del poder. Las cúpulas volvieron a sus tratos habituales. A su vez exigieron que la sociedad se comportara como si nada hubiera ocurrido. Ha proseguido el patrimonialismo como cultura

política del poder. Hubo imposición centralista con cierto rejuogo y negociaciones de grupos elitistas. La ciudadanía estuvo marginada en todas esas decisiones. Se encontró ante un gobierno al que nunca eligió ni formalmente. Este, en la inercia del cosifismo siguió interpretando cualquier actuación independiente como revuelta, y la defensa de derechos como desestabilización. El poder no está acostumbrado sino a la corporativización y neocorporativización y no a la movilización ciudadana. Esta le ha nublado aun su percepción de los partidos políticos. Los de oposición en la localidad, más allá de las paranoias gubernamentales, estuvieron más como simples testigos con capacidad de protesta verbal. Lo preocupante de la situación fue el tono fascista que adquirió el discurso gubernamental que negaba el derecho a las minorías y también a los mismos partidos. Su actuación en torno a los problemas de los damnificados fue calificado de agitación y desestabilización.

La democracia no ha estado en la agenda de la recomposición. Pero cada día se hace más evidente que los afectados de las explosiones del 22 de abril han sido víctimas de un sistema antidemocrático. No obstante, ya no es posible un simple reacomodo elitista que recomponga la antigua dominación, sin más. Si antes era la opción de las cúpulas la única que contaba, ahora tiene contrapartes y contrapesos que se han ido configurando. Pese a los esfuerzos de las élites tradicionales, empezó a surgir un movimiento cívico con esa característica exigencia que no claudica y que pone la dignidad y los

derechos por delante. Las maniobras del poder prosiguieron en cuanto a tratar de impedir que las demandas de los afectados que se organizaron con independencia prosperaran. Inicialmente se aparentó que se les aceptaban algunas propuestas, pero a la hora de las acciones lo prometido se empequeñecía. La presencia de la actividad de los damnificados le ha causado mucha molestia a un dominio acostumbrado a negociaciones cupulares. Ha habido no sólo insensibilidad, sino incapacidad para tratar organizaciones cívicas. Primero se maquilló la dominación con cierta apertura, para después ejercer la fuerza. Las autoridades apuestan al desgaste, al miedo y al desánimo. Pero no tienen la percepción de lo que son capaces este tipo de movimientos civiles. Encima del daño, a los afectados les arrojaron una burocracia engorrosa, pesada y tramposa, para posteriormente hacerles probar a los no dóciles la represión. A los vicios del cosifismo se añadió esta nueva ignominia. El nuevo gobierno cayó en los mismos esquemas que habían conducido al anterior a graves problemas de gobernabilidad y credibilidad. Por su parte, el grupo de damnificados independiente, después de la represión no cayó en el temor, sino que se colocó en una situación de enérgica defensa de sus derechos y de una participación propositiva. Se ha dado un fuerte contraste entre una solidaridad usurpada y espuria que es la de una costosa burocracia gubernamental orientada a la confusión de los ciudadanos, a su control y a la ruptura de liderazgos naturales, y una auténtica solidaridad entre ciudada-

nos, que pese a problemas, es desinteresada y que está respetando el ritmo y las decisiones de los afectados.

Los ciudadanos tienen delimitada su manifestación política sobre todo en los períodos electorales. Una vez que éstos quedan cerrados, la actividad se concentra en el plano de los aparatos partidarios. Cuando los ciudadanos prolongan una actividad de cara al poder, imponen una presencia en otros códigos a los habituales. Esto es más propicio en tiempos de crisis sociales y políticas. Últimamente los movimientos cívicos han ido encontrando formas de expresión más constantes. Además hay crisis cuya duración es mayor a la que la política tradicional está acostumbrada. La de Guadalajara parece mostrar una estructura que presagia una larga permanencia. Los ámbitos de expresión ciudadana se han ampliado.

Si a la actuación de la ciudadanía que intenta expresarse autónomamente, el gobierno responde con presiones, cooptaciones e intimidaciones, una dignidad reactivada ha ido caminando en

sentido distinto al que quiere el poder. Se van fraguando otras percepciones de la relación entre gobernantes y gobernados. Los sometimientos disgustan. Los estilos tradicionales tanto gubernamentales como partidarios son puestos en cuestión. Sobre todo al poder gubernamental se le han ido resquebrajando antiguos esquemas. Instrumentos antes operables ya no le funcionan bien. Todavía corporativiza; pero ni una situación homogenizadora permite hacer entrar a todos los afectados en un mismo molde. La dominación prosigue, pero con acotamientos. La hegemonía está en disputa. Tampoco las instancias partidarias quedan como cauces privilegiados de expresión alternativa. Hay búsquedas de otras manifestaciones organizativas, menos estructuradas y más flexibles. Se revalora lo cívico frente a otras identidades más restrictivas. No hay sujetos protagónicos únicos. La pluralidad aparece, y las convergencias establecen los nuevos contactos. La exigencia de democracia persiste.